



UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO

**FACULTAD DE DERECHO
ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE DERECHO**

**Daño al menor de edad como circunstancia agravante especial en la
graduación de las sanciones administrativas de la Ley N° 29571**

**TESIS PARA OBTENER EL TÍTULO PROFESIONAL DE:
Abogada**

AUTORA:

Br. Zapata Saavedra, Fiorella del Pilar (ORCID: 0000-0002-4758-6737)

ASESORA:

Dra. Sandoval Valdiviezo, Jesús María (ORCID: 0000-0001- 6020-0790)

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN:

Derecho del Consumidor

PIURA - PERÚ

2020

DEDICATORIA

*A Luciana Fiorella Figueroa Zapata,
la niña que se convirtió no solo en mi hija, sino en
mi amiga, cómplice, y compañera de esta vida.*

AGRADECIMIENTO

Gracias a Dios, mi perfecto padre celestial en quién entregue mi vida y confianza completamente; que con su promesa y su sublime gracia él me transformo y cambio mi vida alcanzando poco a poco muchos logros en mi vida tanto en el ámbito estudiantil como personal. le agradezco a mi madre y a mi hija; mujeres que me han enseñado lo hermoso que es la vida, que con sacrificio y ahínco todo se puede alcanzar, sin importar el tiempo, las circunstancias o los obstáculos.

Página del Jurado

DECLARATORIA DE AUTENTICIDAD

Yo, FIORELLA DEL PILAR ZAPATA SAAVEDRA, identificada con DNI N° 46332027, con la finalidad de cumplir las disposiciones vigentes consideradas en el Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César Vallejo – filial Piura, Facultad de Derecho, Escuela de Derecho, declaro bajo juramento que toda la documentación que adjunto es cierta y legítima.

Asimismo, declaro también que todos los datos e información consignados en el presente trabajo de investigación son auténticos y verídicos.

En tal sentido, asumo la responsabilidad que se corresponda ante cualquier falsedad, ocultamiento u omisión tanto los documentos como de información aportada, por lo cual me someto a lo dispuesto en las normas académicas de la Universidad César Vallejo - Filial Piura.

Piura, febrero de 2020



FIORELLA DEL PILAR ZAPATA SAAVEDRA

DNI N° 46332027

Índice

Carátula	i
Dedicatoria	ii
Agradecimiento	iii
Página del Jurado	iv
Declaratoria de Autenticidad	v
Índice	vi
Índice de Tablas	vii
Índice de Ilustraciones	vii
RESUMEN	viii
ABSTRACT	ix
I. INTRODUCCIÓN	1
II. MÉTODO	17
2.1. Diseño de investigación	17
2.2. Escenario de estudio	18
2.3. Participantes	18
2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad	19
2.5. Procedimiento	25
2.6. Métodos de análisis de datos	27
2.7. Aspectos Éticos	28
III. RESULTADOS	29
IV. DISCUSIÓN	36
V. CONCLUSIONES	39
VI. RECOMENDACIONES	41
REFERENCIAS	42
ANEXOS	43
Matriz de Consistencia Lógica	44
Matriz de Consistencia Metodológica	45
Validación DE Instrumentos	46
Acta de Originalidad de Tesis	63
Pantallazo del Software Turnitin	64
Autorización de Publicación de tesis	65
Autorización de la Versión Final del Trabajo de Investigación	66

Índice de Tablas

Tabla N° 01.....	29
Tabla N° 02.....	30
Tabla N° 03.....	31
Tabla N° 04.....	32
Tabla N° 05.....	33
Tabla N° 06.....	34

Índice de Ilustraciones

Ilustración 1.....	29
Ilustración 2.....	30
Ilustración 3.....	31
Ilustración 4.....	32
Ilustración 5.....	34
Ilustración 6.....	35

RESUMEN

El presente estudio de indagación; es de tipo sustantivo, de diseño no experimental, tiene como propósito indagar y establecer la razón jurídica como circunstancia agravante especial el daño ocasionado al menor de edad en la graduación de las sanciones administrativas previstas en la Ley N° 29571, la investigación Sustantiva, tiene como finalidad responder a problemas teóricos. Contamos con 20 personas, teniendo 5 especialistas en el campo del Derecho, donde se les realizó una entrevista como instrumento para la recopilación de información.

Finalmente, concluimos que es adecuado y asequible establecer como circunstancia agravante especial el daño ocasionado al menor de edad en la graduación de las sanciones administrativas señaladas en la (Ley N° 29571, 2010) ya que, se vulnera el Principio del interés superior del niño y adolescente aprovechándose de su falta de criterio, inexperiencia e ingenuidad para tomar decisiones al momento de elegir un producto o servicio.

Palabras Clave: Daño al menor, sanción administrativa, principio de interés superior del niño y adolescente.

ABSTRACT

The present research study; Is of a substantive type, of non-experimental design, has the purpose of investigating and establishing the legal reason as a special aggravating circumstance the damage caused to the minor in the graduation of the administrative sanctions provided for in Law No. 29571, Substantive investigation, has In order to respond to theoretical problems. We have a population of 20 people, and whose sample was 5 specialists in the field of Law, where they were interviewed as an instrument for the collection of information.

Finally, we conclude that it is appropriate and affordable to establish as a special aggravating circumstance the harm caused to the minor in the graduation of the administrative sanctions indicated in (Law No. 29571, 2010), since it violates the "principle of the superior interest of the Child and adolescent "taking advantage of their lack of criteria, inexperience and ingenuity to make decisions when choosing a product or service.

Keywords: damage to the minor, administrative sanction, principle of higher interest of children and adolescents.

I. INTRODUCCIÓN

Actualmente en el Perú existe un consumismo extremo, las personas compran productos y hacen uso de servicios muchas veces de manera innecesaria; un sector de esos consumidores son personas que no alcanzan la mayoría de edad, es decir son niños, adolescentes, para ello las empresas ofrecen una gran diversidad de productos y servicios; utilizando una publicidad especial que es regulada por el Estado; sin embargo, pese al control y regulación estatal los publicistas buscan la manera de generar la expectativa de compra en los menores y muchas veces emplean mensajes ocultos o expresos que implican una negación de valores al promocionarlos en el mercado por ser estos engañosos, ya que tienen como único fin posicionarse en el mercado y lograr captar al consumidor llegando al punto de transgredir derechos ocasionando así daños físicos y psicológicos; sobre todo aquellos daños producidos a esa población vulnerable que son los menores de edad donde se aprovechan de su falta de criterio para tomar decisiones, de su inexperiencia e ingenuidad.

Este trabajo de investigación tiene por finalidad que la ley de protección al consumidor establezca como circunstancia agravante especial al momento de graduar las sanciones administrativas señaladas en la (Ley N° 29571, 2010), el daño ocasionado al menor de edad; buscando así que INDECOPI se encargue de imponer las respectivas sanciones administrativas por ser una entidad que lo único que busca es proteger los derechos del consumidor y custodiar la competencia desleal en nuestro país. Por tanto, lo que se quiere es crear conciencia en los proveedores ya sea distribuidores, prestadores, productores e importadores, para evitar dañar al menor de edad y buscar en todo momento su protección, teniendo en cuenta el interés superior de éste.

En nuestra sociedad peruana existen excesos de los empresarios al ofrecer sus productos o servicios destinados a los menores de edad, en el cual utilizan mensajes exagerados o excesivos buscando así persuadirlos y convertirlos en consumidores finales, donde alteran su estabilidad física y psicológica; como tenemos por ejemplo en el ámbito internacional la publicidad que causó polémica de Armani Junior Girls; donde la moda infantil del italiano Giorgio Armani exagera al promocionar sus productos, exhibiendo a diferentes niñas con ropas diminutas,

poses y miradas que incita a la morbosidad, y hasta un prototipo de belleza; conllevando al menor a usar un modelo de vestimenta no acorde a su etapa de vida ya sea niñez o adolescencia, originando así una inestabilidad emocional por optar posturas y comportamientos de una persona adulta como la forma de vestir, actuar o evitando el sobrepeso para verse mucho más delgadas y alcanzar la “belleza” anhelada que la misma publicidad impone. Por el otro lado tenemos en el ámbito nacional a la Empresa Claro donde utilizan una propaganda emitida con su slogan ¡Volver a clases nunca fue tan fácil! emitiéndolo en canales de televisión e internet, donde brindan información distorsionada señalando que el retorno a clases es un malestar por las actividades estudiantiles que se deben realizar, el levantarse temprano para asistir al colegio y lo tedioso que esa responsabilidad se convierte si no tienen internet. Ofreciendo la empresa Claro los mejores servicios para que la realización de esta actividad estudiantil sea la más adecuada y viable para el menor de edad en época escolar. Esta información que se emite de este servicio distorsiona la realidad, pues enseña que para cumplir la obligación con el retorno a clases debe consumir el servicio de internet. Sin embargo, la realidad es que éste no es indispensable para lograr la superación personal sino la responsabilidad y empeño que tenga cada menor para alcanzar buenas notas, atender y entender las clases dictadas y todo lo concerniente a esta responsabilidad.

Asimismo, muchas veces la venta de productos y prestación de servicios dirigidos a menores de edad se hace mediante el uso de publicidad en donde se distorsionan las características de los productos o servicios, lo que se denomina publicidad engañosa; donde utilizan mensajes, colores, personajes o animaciones induciendo en las decisiones que estos pueden asumir. Es por ello se busca proteger a esta masa de consumidores evitando hábitos, comportamientos o costumbres negativos que atenten contra su salud física y psicológica; respetando así la inocencia, inexperiencia e ignorancia de estos menores de edad. Tal como lo señala la (Ley N° 29571, 2010) en su artículo 16 donde hace alusión a los anuncios dirigidos a los menores de edad, como también existe el Decreto Legislativo 691, donde prescribe en su artículo 10 las reglas que deben someterse los anuncios dirigidos a menores de edad.

Por último, este trabajo de investigación muestra la problemática de nuestra realidad sobre el consumo dirigido hacia los menores de edad que a pesar de tener normas que lo sustenten y protejan se sigue atentando contra ellos creando un consumo inconsciente; generándoles un daño físico y psicológico. Más aún, los medios de comunicación son importantes en nuestra sociedad porque nos informan constantemente, pero también es cierto que este tipo de información que transmite debe ser veraz, real y acorde a la edad del menor con respecto a los productos o servicios que ofrecen diversos proveedores; sin exagerar en sus características, contenido o imágenes que conlleven a comportamientos violentos, discriminatorios; o que cree inferioridad o superioridad de un menor hacia el otro, ya que por ser vulnerables se les puede persuadir o afectar de forma negativa para su desarrollo personal y social. Por lo cual se busca considerar e insertar ese daño como agravante especial en la graduación de las sanciones administrativas señaladas en el artículo 112 de la (Ley N° 29571, 2010).

A nivel internacional, se tiene los estudios de: Torres, Fernando Gabriel (2013) titulada “Ética en el marketing, análisis del mercado infantil en la Argentina”. Argentina, en la que argumenta que es propósito de este trabajo explorar y demarcar los límites que se pueden usar en el área del marketing alusivo al área infantil en Argentina, de modo que dicha actividad se efectúe intrínsecamente en un marco ético que permita diferenciar visiblemente las prácticas estimadas como aceptables, de aquellas que se aproximan peligrosamente a la manipulación.

Asimismo, la tesis de Gómez Rondón, Thiara y Peñate Bohórquez, Katy (2014); titulada: “Niños, Niñas y adolescentes víctimas de la publicidad engañosa” en Colombia, donde los autores proyectan la necesidad de un reglamento especial en Colombia sobre los anuncios dirigidos al menor de edad, por ser éstos vulnerables ya que requieren una protección exclusiva. El estudio se desenvuelve en precisar primero los conceptos a utilizar en el trabajo, como segundo punto, se efectúa una revisión de la jurisprudencia a través de la cual hacen explícito el problema; y por último pasan a concluir el apresuramiento de un desarrollo de la obligación impuesta por la Ley 1480 de 2011 para garantizar con ello que no se cometan abusos en el diseño y empleo de la publicidad dirigida a la población del menor de edad.

A nivel nacional se tiene las investigaciones de: “Tafur Asenjo, Karina del Pilar (2012), titulada “La desprotección del consumidor frente a las ventas agresivas. La imitación insuficiente de la normativa europea”. Perú. Este trabajo de investigación la tesista aplicando el método analítico concluye que los casos que ha conocido INDECOPI con respecto a las ventas agresivas requieren de una normatividad especial de cual no se cuenta, por ello es imperativo su reglamentación. Se demostró que las acusaciones mostradas por consumidores afectados económicamente por ventas agresivas, no se solucionaban de manera próspera debido a la falta de un reglamento que los salvaguarde con respecto a estas prácticas, así como también la valoración justa de los medios probatorios otorgados por el consumidor, según se determina en la normativa vigente tal como se muestra en el inicio de la investigación.

La convención de los derechos del niño y adolescente, en adelante la Convención, considera niño a todo a todo ser humano que tenga menos de dieciocho años a menos que en el derecho interno haya cumplido antes la mayoría de edad. Es importante que la convención precise a quién se considera niño y objeto de protección por esta norma; ya que se evita que las legislaciones de cada país sean dispersas y no hay uniformidad en el tratamiento jurídico a los menores de edad.

En relación con los derechos del menor de edad, la Convención señala que el niño por su falta de madurez física, emocional, sexual y mental necesita protección y cuidado especiales, incluso la debida protección legal, tanto antes como después del nacimiento (UNICEF, 2006). Como es sabido el desarrollo del ser humano se da por etapas en donde hay unas en las que es más vulnerable y necesita ser protegido ya sea por sus padres, tutores u otros familiares o por el Estado, ya que éste aún no tiene la capacidad de decidir responsablemente.

La Convención reconoce una serie de derechos a los niños, dentro de ellos el derecho a la vida, a la salud, al nombre e identidad, a crecer en un ambiente libre de violencia, a la libertad, el derecho a estar informado, a una nacionalidad, a tener una familia y crecer en ella, a los alimentos, a la educación, etc. y obliga a los estados partes a que adopte todas las medidas necesarias que garanticen que el

menor disfrute de éstos derechos y que en caso se les vulnere se les indemnice convenientemente.

En el Artículo 3° de la Convención se reconoce como principio fundamental del derecho del niño y adolescente al Principio de interés superior del niño y adolescente, el cual se constituye en una norma fundamental, en una línea directriz, para la aplicación de las normas que regulan los derechos y la justicia de los menores de edad. Este principio constituye un compromiso que asumen los Estados parte de la convención para proteger al niño y adolescente en cualquier situación en la que el Estado a través de sus diversas instancias deba adoptar una decisión relacionada a él, fundamentalmente en la que se vean afectados los derechos más importantes que poseen.

En la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente; se afirma sin lugar a duda, en el contenido del Artículo 8° del referido texto legal, que el Interés Superior del Niño es un principio para la interpretación y aplicación de esta ley, el cual es de imperativo cumplimiento en la toma de todas las decisiones en la que estén involucrados niños y adolescentes. Este principio pretende proteger el desarrollo integral de los niños y adolescentes, así como garantizar el disfrute pleno y efectivo de sus derechos y garantías. (Morais & Cornieles, 2004) .

Asimismo, la Convención sobre los derechos del Niño señala en su artículo 2° que: Los Estados partes velarán por el respeto los derechos reconocidos en la presente Convención y garantizarán su aplicación a cada menor sujeto a su justicia, sin diferenciación alguna, al margen de su raza, sexo, el idioma, condición religiosa, opinión política, origen, condición económica, étnica o social, los impedimentos físicos, lugar o condición de nacimiento o cualquier otra circunstancia del niño, de sus progenitores o de sus representantes legales, etc. (UNICEF, 2006).

Según la “Jurisprudencia Cas N°1805 – 2000 Lima”, El peruano, 30 – 01 – 2001 señala que el “Interés superior es un principio que garantiza satisfacción de los derechos del menor; y como estándar jurídico implica que dicho interés deberá estar presente en el primer lugar de toda decisión que afecte al niño o adolescente” (Código Civil, 2015). Esto significa que en toda decisión del Estado relacionada a los menores de edad debe preferirse lo más favorable a ellos.

Por lo tanto, este principio es la base fundamental donde debe permanecer la protección y defensa de la menor edad, ya que lo que se busca es avalar el desarrollo y progreso pleno de esta masa vulnerable buscando así respeto, seguridad y resguardo, en diferentes ámbitos ya como en familia, el colegio y en la misma sociedad; buscando alcanzar para ellos una buena calidad de vida y un crecimiento sano e íntegro.

Por otro lado, la Convención Americana de los Derechos Humanos en su artículo 1° determina que los Estados parte asumen el compromiso de respetar los derechos y libertades que ésta reconoce y a garantizar su ejercicio libre a toda persona sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de sexo, raza, idioma, opinión política, religión, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social o de cualquier otra índole. Asimismo, señala en su artículo 19 sobre los derechos del niño que: “Todo niño tiene derecho a las medidas de protección que su condición de menor requiere por parte de familia, de la sociedad y del Estado” (Quiroga León, 2014).

Lo señalado por estas normas internacionales nos invita a concluir que el menor de edad debe ser protegido en todo lugar y frente a cualquier tipo de violencia; pues a pesar de tener leyes que los protejan muchas veces no son respetados. Es por ello que a esta población se le debe salvaguardar en sus derechos primordiales para que tengan un desarrollo equilibrado y pleno, es decir una estabilidad psicológica, emocional, sexual y física en la sociedad.

Es importante definir lo que se entiende por producto y servicio a efecto de tener una idea clara sobre lo que es el objeto de una relación de consumo. Por producto se entiende a todo bien mueble o inmueble que tenga una estructura material o inmaterial, ya sea nacional o extranjero. Por servicio debe entenderse a la actividad de prestar de un servicio y que puede ser de naturaleza financiera, de crédito o bancaria, servicios técnicos profesionales, de recreación, etc. se están comprendidos los servicios que se prestan como consecuencia de una relación laboral o de dependencia.

Son varios los principios que rigen el derecho del consumidor, sin embargo, teniendo en cuenta el objeto de esta investigación nos centraremos en el análisis

de unos de ellos como el principio de soberanía del consumidor, el cual sostiene que se debe fomentar que el consumidor adopte decisiones libres e informadas en su relación de consumo, pero ello será posible en caso de que el consumidor sea una persona que posea la capacidad para adoptar responsablemente esas decisiones, no en el caso de menores de edad en el que estas personas aún no tienen el criterio suficiente para ello y deben ser protegidos por el Estado a través de sus autoridades.

El principio pro-consumidor, el cual implica que el Estado debe realizar una actuación tuitiva a favor del consumidor. Una de las manifestaciones de este principio es que en caso de duda en la aplicación de normas debe preferirse la más favorable a él; de igual modo en caso de dos interpretaciones de una misma norma debe elegirse la que más favorece al consumidor.

El principio de transparencia que significa que los proveedores de productos y servicios deben facilitar el acceso a la información acerca de los bienes o productos o servicios que ofrecen. Este principio exige no solo que la información que se brinde sea real; sino que debe ser apropiada, es decir adecuada al consumidor sin afectar las buenas costumbres y la moral, además, tratándose de menores de edad que no afecten su normal desarrollo.

Los derechos que tiene el consumidor en su relación de consumo son: el derecho de protección ante productos o servicios que representen peligro para su vida o salud. El derecho a ser informado adecuadamente para la toma de una decisión de acuerdo con sus intereses. Derecho a ser protegido en sus derechos patrimoniales, sobre todo ante cláusulas abusivas y otras prácticas comerciales que atenten contra él. El derecho a la reparación si se le produce un daño. El derecho a elegir libremente el producto o servicio que desee. El derecho a seguir procedimientos sencillos, rápidos y eficaces para la solución de un conflicto en la relación de consumo. El derecho a ser oído ya sea de modo individual o colectivo para hacer valer sus intereses. El derecho a asociarse para proteger sus intereses en el marco de la relación de consumo. Estos derechos están previstos en el artículo 1° del Código del Consumidor. Es preciso indicar que la enumeración de estos derechos no es cerrada y no excluyen otros que el código y las leyes especiales reconozcan.

Se pone especial interés en el derecho a la información del consumidor por tener íntima relación con el tema de investigación, ya que tratándose se proteger al menor de edad en una relación de consumo, la información que se le brinde debe ser especial para una toma de decisión de acuerdo con sus intereses. En este sentido la información que se le brinde debe ser relevante, veras, de fácil comprensión, suficiente, en el idioma castellano. Del mismo modo se prohíbe la información falsa o inexacta que induzca a error y se exige que se brinde toda la información necesaria en relación con el precio y al medio de pago.

El código del consumidor, desarrolla todo un subcapítulo para el tema de la protección del consumidor ante la publicidad, y ello debido a que es muy importante para la toma de decisiones y en el artículo 16° se regula lo relativo a la publicidad dirigida a los niños y adolescentes, y se exige que esta no debe inducir al menor a que saque conclusiones equivocadas sobre las características de los servicios y productos y que los proveedores deben respetar su condición de inmadurez, su ingenuidad, su inexperiencia, su sentido de lealtad. Algo que es muy importante es que la publicidad dirigida a menores de edad no debe generar sentimientos de inferioridad en el menor que no adquiere o no consume el servicio o producto ofertado.

Las infracciones administrativas que pueden cometerse en el desarrollo de una relación de consumo son todas aquellas que afecten los derechos descritos en el artículo 1° del código del consumidor lo que hace merecedor al infractor de una sanción administrativa, además de las sanciones civiles o penales a las que hubiera lugar si se causa un daño o si la conducta constituye un ilícito penal.

La sanción es el medio jurídico destinado para asegurar el orden de la administración, es decir, la medida disciplinaria aplicada por una autoridad administrativa, por una falta cometida en la actuación de sus cargos o susceptible de afectar este ejercicio. (Quintana Vivanco & Cabrera Vázquez, Marco Antonio, 2011). Por otro lado, el hablar de ius puniendi hacemos referencia a la potestad o facultad que tiene éste para imponer las sanciones correspondientes en caso de evidenciar la contravención al ordenamiento jurídico. Dicha potestad puede ser ejercida a través de los jueces penales en el caso de comisión de delitos o de la

Administración Pública en el caso de infracciones. (Aguila Grados C. , ABC del Derecho, 2013)

En tal sentido, la potestad sancionadora de la Administración puede ser definida, en palabras de Vergary y Gómez, como “el poder jurídico que posee la Administración Pública para castigar a los administradores, cuando estos lesionan determinados bienes jurídicos reconocidos por el marco constitucional y legal vigente. Esta potestad, mediante la represión de ciertas consecuencias busca incentivar el respeto y cumplimiento del ordenamiento jurídico, desincentivando la realización de infracciones”. (Vergary Béjar & Gómez Apac, 2009).

De acuerdo con lo señalado por los autores, las sanciones administrativas son aplicadas a las conductas ilícitas cometidas por los administrados, por haber atentado contra lo establecido administrativamente. Asimismo, determinan que, para poder considerarse como infracción, la conducta debe transgredir aquello que es establecido con rango ley y que exista culpabilidad, por parte de quien la comete. En otras palabras, la conducta debe estar tipificada y el agente debe actuar culpablemente, es decir debe ser responsable por actuar con dolo o con imprudencia.

Consumidor y protección de sus derechos. El consumidor debe acoger información correcta para tomar una mejor decisión al momento adquirir algún producto. Información cierta y verídica, no aquella información con expectativas exageradas, queriendo captar al consumidor. (Durand Carriòn, 2011)

Asimismo, el Derecho del Consumidor es una disciplina singular, especializada y con cierta autonomía que no se ubica ni en el Derecho Privado ni en el Derecho Comercial, Derecho Civil; sino que constituiría una disciplina de carácter interdisciplinario y que está fortalecida de nuevos conceptos y que además tiene notas características importantes. En consecuencia, el Derecho al consumidor; puede ser conceptualizado como el conjunto de medidas legales adoptadas por un estado con la finalidad de defender la capacidad adquisitiva de su población, cautelar su salud y seguridad física frente a la administración de determinados productos y servicios, y garantizar la utilidad o capacidad de uso de

los bienes que adquiera o de los servicios que contrate para la satisfacción de sus necesidades. (Aguila Grados & Gallardo Michelot, Protección al Consumidor, 2014)

Con respecto a lo señalado por este autor se llega a determinar que la información que se brinde para promocionar un producto o servicio debe ser verídica, real, adecuada y cierta de acuerdo con lo que se está ofreciendo al consumidor; ya que se estaría trasgrediendo sus derechos si esto sería contrario, vulnerando así la vida, salud y hasta la integridad física y psicológica.

El Daño surge de la lesión sobre un interés jurídicamente protegido y privilegiado, o todo detrimento a los beneficios o derechos de los individuos con relación a lo social, asimismo se considera que merece protección legal por ser importantes para la vida del ser humano (Aguila Grados & Capcha Vera, 2013).

Por otro lado, según el Diccionario Jurídico de la Real Academia se define al “Daño” como detrimento, perjuicio, menoscabo, dolor, molestia. Es importante mencionar que el daño, entendido como perjuicio de una cosa, que es relevante en el mundo jurídico, es el causado por otro o un tercero; pues si el daño es originado por el propietario del bien, el actuar tiene poca o ninguna consecuencia jurídica. Pero se obtiene esta consecuencia legal si el daño es generado por el ejercicio o negligencia de una persona que no es el dueño. (Ossorio, 2013).

El autor del daño incide en responsabilidad, pudiendo enmarcarse en lo civil si se ha ocasionado por accidente, sin culpa punible ni dolo; o determinarse en lo penal si actuado con imprudencia o negligencia (culpa), o si se tiene la mera intención de producirlo. La responsabilidad civil por los daños puede originarse aun cuando el imputado no haya tenido ninguna actuación, ya sea directa ni indirecta. (Ossorio, 2013)

Según el autor establece que el daño es todo menoscabo, deterioro y perjuicio generado por el incumplimiento de obligaciones, en este caso, de proveer productos o brindar servicios destinados a menores de edad. El daño debe ser originado de manera dolosa o culposa para que tenga relevancia jurídica a efecto de que genere la consecuencia de que se aplique una sanción o se obligue al responsable a pagar una indemnización, pues si éste se produce por un caso

fortuito o por la intervención de la naturaleza no se genera la obligación de indemnizar.

Podemos clasificar al daño en: daño físico entendido como detrimento o lesión que se causa al organismo o al cuerpo de la persona, este daño provoca invalidez, incapacidad para el trabajo, pérdida de órganos o miembros del cuerpo desfiguración o toda lesión que es perceptible por los sentidos. Este daño es determinado por el médico legista, que es el profesional encargado de determinar la gravedad del daño físico.

El daño psicológico o daño psíquico, es la afectación a las facultades mentales del ser humano, se señala que son lesiones neurológicas o al sistema nervioso que se manifiestan en problemas de conducta, trastornos del sueño, problemas de personalidad, miedos, retardo mental, agresividad, abulias, etc. Este daño es más difícil de determinar dado que muchas veces se manifiesta mucho después de la causa que lo origina; por ejemplo, si se maltrata psicológicamente a un niño puede que sus consecuencias se observen cuando éste ya sea un adulto; y también porque cada persona tiene sus propios rasgos de personalidad, etc. El psicólogo forense es el profesional encargado de determinar el nivel de daño psicológico que puede ser leve, moderado o grave.

El daño moral afecta el estado de ánimo, afectos o los sentimientos de una persona y se manifiesta en la angustia, la aflicción física o espiritual, el dolor, la humillación que ésta padece como consecuencia del accionar negligente o doloso de otro. La doctrina entiende que el daño moral es objetivo y subjetivo, el primero se refiere a la consideración social que se le tiene al sujeto afectado y el segundo es lo que el sujeto experimenta en su espiritualidad. La medición del daño moral es sumamente compleja en la medida que el bien que se lesiona es extrapatrimonial.

El daño patrimonial es el detrimento o menoscabo que se causa a los objetos o cosas que forman parte directa o indirectamente del patrimonio de otra persona. Ahora bien, se entiende por patrimonio como el conjunto de bienes que tienen valor económico y que son reconocidos por el ordenamiento jurídico, por ejemplo, el dinero, joyas, ganado, cosechas, etc. medir el daño patrimonial es más sencillo a diferencia de las otras clases de daños, pues al tratarse de daños a objetos

materiales estos son más sencillos de cuantificar a través de una pericia especializada.

El daño que interesa para efectos del presente estudio es el daño psicológico, moral y físico; en el entendido que el menor puede ser afectado en su salud física, psicológica y en su estado de ánimo como consecuencia de la publicidad engañosa, tendenciosa en su relación de consumo. No se considera que haya una afectación al patrimonio del menor de edad, en la medida que no tiene la capacidad de haber generado un patrimonio, debido a su edad y a que en la mayoría de los casos depende económicamente de sus padres o tutores; por lo que se pondrá énfasis en los daños extrapatrimoniales.

Por criterio de proporcionalidad y por el principio del interés superior del niño y adolescente se postula que el daño que se ocasione al menor de edad en una relación de consumo debe ser considerado como una circunstancia agravante, pues el menor se encuentra en una situación en la que no puede tomar decisiones adecuadas y protegerse a sí mismo en dicha relación.

El Código del Consumidor, en su diversas disposiciones regula las formas de responsabilidad que asume el proveedor de productos o servicios en su relación de consumo; así conforme al Artículo 100°, señala que el proveedor que cause daños y perjuicios al consumidor debe indemnizarlo de acuerdo a las normas del Código Civil; pero además asume responsabilidad penal, cuando el hecho constituya un delito, y administrativa, así como la obligación de reparar y adoptar todas las medidas complementarias para la protección del consumidor.

Por los productos defectuosos que ofrezca al consumidor y que causen daños a la integridad corporal o física de éste o a sus bienes, el proveedor asume responsabilidad civil (Artículo 101) esta responsabilidad es objetiva, es decir no es necesario que se acredite que el proveedor haya actuado dolosa o culposamente, basta con la verificación del resultado dañoso. Si fueren varios los proveedores, la responsabilidad es solidaria; es decir el afectado puede exigir el resarcimiento a uno de ellos, el cual podrá repetir contra el otro y otros corresponsables.

Ahora bien, es necesario definir qué es un producto defectuoso, en este sentido el artículo 102° del código del consumidor, señala que un producto es

defectuoso es aquél que no garantiza la seguridad de las personas, para lo cual debe considerarse las características más importantes como: el material del que está fabricado, su contenido y la condición en la que se encuentra; el diseño del producto; el uso previsible de éste; la forma como ha sido colocado en el mercado; su apariencia; si se han señalado las instrucciones o advertencias para su uso o empleo; entre otras, necesarias para garantizar la salud y bienestar de los consumidores.

La indemnización debe incluir todas las consecuencias causadas por el o los defectos del producto, como son el daño emergente, que es el detrimento o deterioro del bien afectado; el lucro cesante, entendido como las ganancias legítimas o utilidades que se dejan de percibir como consecuencia del daño; el daño a la persona, que implica un daño que recae sobre el ser humano a su integridad física o psíquica y finalmente el daño moral, que es el daño a los sentimientos del consumidor.

La Responsabilidad administrativa del proveedor (Artículo 104), se establece en base a la carencia de idoneidad o la mala calidad del producto o servicio, a la falta o defectuosa de información y otras infracciones establecidas en el código del consumidor y otras disposiciones complementarias que protegen al consumidor.

La responsabilidad administrativa puede desaparecer si el proveedor acredita una causa objetiva, que justifique su conducta, la cual no es previsible, de modo que rompa el nexo causal; ya sea por caso fortuito, fuerza mayor, por la intervención de un tercero o por la propia imprudencia del consumidor.

El Artículo 112° fija los criterios para la graduación de la sanción administrativa; en este sentido se considera a: 1. El beneficio ilegal que el infractor alcanzó o esperó alcanzar con la comisión de la infracción; la posibilidad de que se detecte la infracción; el daño que produce la infracción; los efectos que la conducta infractora pueda haber generado en el mercado. 5. La naturaleza del perjuicio causado o grado de afectación a la vida, salud, integridad o patrimonio de los consumidores. 6. Otros criterios que, dependiendo del caso particular, se considere adecuado adoptar. Se consideran circunstancias agravantes especiales, las siguientes: 1. La reincidencia o incumplimiento reiterado, según sea el caso. 2. La

conducta del infractor a lo largo del procedimiento que contravenga el principio de conducta procedimental. 3. Cuando la conducta infractora haya puesto en riesgo u ocasionado daño a la salud, la vida o la seguridad del consumidor. 4. Cuando el proveedor, teniendo conocimiento de la conducta infractora, deja de adoptar las medidas necesarias para evitar o mitigar sus consecuencias. 5. Cuando la conducta infractora haya afectado el interés colectivo o difuso de los consumidores. 6. Otras circunstancias de características o efectos equivalentes a las anteriormente mencionadas, dependiendo de cada caso particular.

Como se observa, el código del consumidor no establece como agravante el daño que se ocasione al menor de edad en la relación de consumo, lo cual, a criterio de la tesista, afecta el principio del interés superior del niño y adolescente y además los criterios de proporcionalidad.

De lo mencionado hasta esta línea, la formulación del problema se redacta en los siguientes términos:

¿Cuál es la razón jurídica para establecer como circunstancia agravante especial el daño ocasionado al menor en la graduación “de las sanciones administrativas previstas en la Ley N° 29571”?

El estudio realizado por la tesista tiene una justificación teórica, doctrinaria, metodológica, que describiremos en las líneas siguientes. La defensa de los derechos de los menores de edad es fundamental en nuestra sociedad, por lo que se busca proteger a esta población vulnerable, evitando que sus derechos sean transgredidos; y a pesar que en nuestro país existen normas como el "Código de protección y defensa del consumidor Ley N° 29571, el Decreto Legislativo N° 691 y la reciente Ley de promoción de la alimentación saludable para niñas, niños y adolescentes"; muchas veces estas normas no son respetadas ni cumplidas a cabalidad, por lo que se busca con éste proyecto de investigación proteger al menor de edad con respecto al consumismo inconsciente que existe en nuestra sociedad, evitando así que sean confundidos al momento de tomar una elección con respecto al elegir un producto o servicio, impidiendo consecuencias negativas ya sea en el ámbito familiar, escolar, social y de la salud como por ejemplo el preferir algún cereal que no sea nutritivo, conteniendo un alto grado de azúcar y conllevándolo

incluso a la obesidad, así como también al momento de preferir algún modelo o estilo de vestimenta no acorde a su edad, eligiendo un tipo de juguete como son las muñecas Barbie o el max steel que impone un tipo de “belleza” que se desea alcanzar porque así la publicidad lo establece al momento de promocionarlos; o el adquirir un servicio como es el internet, creyendo que su vida escolar será más fácil, simplificada y que obtendrá las mejores calificaciones; tal como se lo muestra el proveedor de esta prestación de servicios.

Por lo que este tema de investigación busca establecer como circunstancia agravante especial el daño ocasionado al menor en la graduación de las sanciones administrativas establecidas en la (Ley N° 29571, 2010). Como consecuencia, la creación de este nuevo criterio en el apartado de agravantes del artículo 112 determinaría una mejor protección al menor de edad, porque actuarían de forma más consiente los proveedores ya sea distribuidores, prestadores, productores e importadores al promocionar sus productos o servicios en el mercado donde sus consumidores son menores de edad; pues evitarían que les impongan sanciones muy graves y así se estaría protegiendo de una forma más reflexiva al menor de edad.

Así como lo señala la Convención de los derechos del Niño y Adolescente, en su artículo 17°, donde los medios de comunicación desempeñan un lugar elemental en la sociedad, en el cual deben comunicar a estos menores información de interés cultural que los conlleven a un mejor desarrollo, originando un respeto e impidiendo la vulneración de sus derechos; pues lo que se debe evitar es emitir un mensaje distorsionado o mal intencionado al momento de promocionar o vender, ya que sería muy perjudicial para su bienestar.

La hipótesis del estudio es:

La razón jurídica para establecer como circunstancia agravante especial el daño ocasionado al menor de edad en la graduación de las sanciones administrativas previstas en la Ley N° 29571 “es el principio de interés superior del niño y adolescente”.

Los objetivos de la investigación son:

Objetivo General.

Determinar la razón jurídica como circunstancia agravante especial el daño ocasionado al menor de edad en la graduación “de las sanciones administrativas previstas en la ley N° 29571”

Objetivos Específicos

- 1) Analizar las infracciones administrativas contempladas en el código del consumidor.
- 2) Analizar las sanciones administrativas contempladas en el código del consumidor.
- 3) Examinar “el principio del interés superior del niño y adolescente”

II. MÉTODO

2.1. Diseño de Investigación

Esta indagación es de modelo “no experimental” de tipo sustantiva o teórica; es de teoría primordial se funda en el interaccionismo simbólico. Su “plan básico son las propuestas teóricas surten de los datos obtenidos de la indagación”. Es el procedimiento el que genera el entendimiento de un fenómeno o hecho social. Está en la exploración de nuevas formas de deducir procesos sociales que tienen lugar en ambientes naturales. (Straus y Corbin, 2004. Pág. 14).

En este caso la investigación se dirige a conocer un fenómeno social como es el consumo de productos por parte de menores de edad, quienes por su misma condición no están en condiciones de entender a cabalidad las consecuencias de sus decisiones y por ello necesitan ser protegidos por la ley, exigiendo que la publicidad dirigida a ellos sea verás, selectiva, prudente a efecto de que estos no se ven vulnerados en su salud física, mental y emocional.

La indagación se emprenderá como un estudio de tipo sustantiva, que es aquella que busca solucionar los problemas teóricos o sustantivos, en tal sentido, está encaminada a detallar, exponer, anunciar o retraducir la realidad que permite constituir una teoría. (Straus y Corbin, 2004. Pág. 14).

La indagación sustantiva se utilizará en el nivel descriptivo y explicativo. En tal sentido, “la indagación tiene como objetivo primordial establecer como circunstancia agravante especial el daño ocasionado al menor de edad en la graduación de las sanciones administrativas previstas en la ley N° 29571”. (Straus y Corbin, 2004. Pág. 14).

La investigación cualitativa se caracteriza porque los resultados no fruto de análisis numéricos o estadísticos sino del análisis e interpretación doctrinaria o teórica que hace el investigador basado en la opinión de expertos en la materia investigada. Esto es debido a que el objeto de estudio es un fenómeno social o jurídico sobre el cual no es posible aplicar la experimentación. La

opinión de los científicos del derecho es fundamental en la medida que como expertos su punto de vista sobre el tema investigado es confiable.

2.2. Escenario de estudio

El estudio se realizó en el distrito de Piura, ya que en esta zona geográfica radica la investigadora y el acceso a la información fue más fácil. Por otro lado, en esta ciudad se encontró el material bibliográfico suficiente para la investigación y los participantes como encuestados y entrevistados pudieron ser entrevistados.

2.3. Participantes

Los participantes están constituidos por la población y muestra. La población es el universo de la comunidad jurídica de Piura, entre profesionales y estudiantes de derecho a quienes se les pidió su participación para resolver las encuestas y la entrevista. La muestra estuvo constituida por veinte miembros de la comunidad jurídica, de la que se pueden sacar conclusiones valederas.

En la siguiente tabla se detallan a los participantes.

Población	N° de abogados
Abogados del Colegio de Abogados de Piura	5000
Muestra	N° de participantes
Estudiantes de Derecho	15
Profesionales de Derecho	5
Total de la muestra	20

2.4. Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos, Validez y Confiabilidad

2.4.1. Técnicas

A) Análisis Documentarios

La revisión documentaria: el proceso de investigación documentaria en la indagación estará encaminada a la localización, realización, aclaración y obtención de información sustantiva para la organización de las bases teóricas de la indagación, se recurre a una pluralidad de fuentes de consulta como artículos de revistas, libros, páginas web, informes de indagación, etc. de todo ello el investigador realiza un análisis.

B) Fichaje

Para afrontar la indagación tenemos por beneficioso manejar la técnica del fichado, de tipo síntesis, bibliográficas y textuales, cuyas herramientas existieron las fichas bibliográficas. La técnica del fichado radica en inspeccionar de forma sistemática el contenido de la información de libros, periódicos y documentos en general, utilizando unas tarjetas, papeletas, fichas de papel o cartulina, con su instrumento bibliográfico.

Esta técnica es muy importante para ordenar clasificar y sistematizar la información recopilada de los textos consultados. En este sentido, se ha examinado muchas jurisprudencias emitidas por los tribunales que han comprendido el tema indagado, asimismo de la exploración documentaria ejecutada. Como instrumentos, se han elaborado diferentes fichas: bibliográficas, de comentario, de resumen, textuales.

C) Entrevista.

Es la técnica que permite almacenar información en forma inmediata, esta técnica conlleva a instaurar acuerdos de los expertos o llamados los consultores especializados, que estipularan la indagación en la medida que desde la praxis profesional.

2.4.2 Instrumentos

a) Ficha de análisis documentario

b) Fichas:

- Bibliográficas
- Resúmenes
- Textual

Ficha Textual

Apellido (s), Inicial de nombre (s). Título, subtítulo. Año	Editorial Ciudad, País
<u>Tema (Subrayado)</u> Página (s) Cita Textual entre comillas	

Ficha Bibliográfica

Apellido (s), inicial de nombre (s). (Año de publicación). Título, Subtítulo Subrayado (Edición si no es la primera.). Ciudad, País: Editorial.

Ficha Resumen

Apellidos(s), Inicial de nombre(s)	Editorial
Título, subtítulo	Ciudad, País
Año	
Resumen (Sin comillas, ni puntos suspensivos)	

FORMATO DE REGISTRO DE CONFIABILIDAD DE INSTRUMENTO

I. Datos informativos

1.1. Estudiante:	Fiorella del Pilar Zapata Saavedra
1.2. Título del proyecto de Investigación:	“Daño al menor como circunstancia agravante especial en la graduación de las sanciones administrativas de la ley N° 29571”
1.3. Escuela Profesional:	Derecho
1.4. Tipo de Instrumento	Entrevista
1.5. Coeficiente de confiabilidad empleado:	<i>KR-20 Kuder Richardson</i> ()
	<i>Alfa de Cronbach.</i> (X)
1.6. Fecha de aplicación:	Del 20 al 30 de setiembre del 2019
1.7. Muestra aplicada:	5 profesionales del derecho

II. Confiabilidad

Índice de confiabilidad alcanzado:	0.65
------------------------------------	------

III. Descripción breve del proceso (*Ítems iniciales, ítems mejorados, eliminados, etc.*)

Se elaboraron 7 ítems, estableciéndose como parte de la entrevista estas interrogantes, aplicándose así a 5 especialistas del derecho. Las opiniones de los profesionales han permitido orientar y darle solidez al tema de investigación respecto de la “daño al menor como circunstancia agravante especial en la graduación de las sanciones administrativas de la Ley N° 29571”.

Estudiante:
DNI :

Docente :

APLICACIÓN DEL MÉTODO DE ALFA DE CRONBACH

Este método necesita de una sola aplicación del instrumento de medición y se ajusta a la respuesta del sujeto con respecto a los ítems del instrumento. Con una muestra piloto. La medición se ajusta y se determina el coeficiente.

CÁLCULO DEL COEFICIENTE:

Fórmula:

$$\alpha = \frac{k}{k-1} \left[1 - \frac{\sum S_{iS}^2}{S_T^2} \right]$$

Dónde:

K : Es el número de ítems.

$\sum S_{iS}^2$: Sumatoria de varianzas de los ítems.

S_T^2 : Varianza de la suma de los ítems.

α : Coeficiente de Alfa de Cronbach.

Procedimiento:

Primero: Deducir las varianzas de cada uno de los ítems en el cuadro de cálculo.

Códigos \ ítems	ítems				
	1	2	3	4	5
1	3	1	3	1	1
2	1	2	2	3	1
3	1	2	3	3	1
4	1	2	2	1	1
5	3	1	1	2	1
$\sum X_i$	9	8	11	10	5
$\sum X_i^2$	21	14	27	24	5
S_i^2	1,2	0,3	0,7	1	0

$$\sum X_i^2 - \frac{(\sum x)^2}{n} = 5 - \left(\frac{5^2}{5}\right)$$

Dónde: $S_i^2 = \frac{\sum X_i^2 - \frac{(\sum x)^2}{n}}{n - 1} = \frac{5 - \frac{5^2}{5}}{5 - 1} = 0$

Paso 2: Determinar la suma de las varianzas de los ítems.

$$\sum S_i^2 = 0 + 1,2 + 0,3 + 1,8 + 0,7 + 1 + 0 = 5$$

Paso 3: Calcular la varianza de la suma de los ítems

Código/	Suma de ítems	Suma al cuadrado
1	11	121
2	11	121
3	14	196
4	9	81
5	10	100
	$\sum X_i = 55$	$\sum X_i^2 = 619$

Dónde: $S_T^2 = \sum X_i^2 / \sum X_i = 619 / 55 = 11.25$

Paso 4: Calcular el coeficiente de Alfa de Cronbach

$$\alpha = \frac{k}{k-1} \left[1 - \frac{\sum S_{is}^2}{S_T^2} \right] \square \square \square$$

$$\alpha = \frac{7}{7-1} \left[1 - \frac{5}{11.25} \right]$$

$$\alpha = \frac{7}{6} \left[1 - 0.44 \right]$$

$$\alpha = 1,17 (0,56)$$

$$\alpha = 0.65$$

Paso 5: Interpretación de la significancia de $\alpha = 0.65$; señala que los resultados de opinión de los 5 profesionales respecto a los ítems estimados, al aplicar la validación con el método del coeficiente de Alfa de Cronbach coeficiente, se expresa una validación en el instrumento de manera positiva confiable y óptima.

2.5. Procedimiento

2.5.1. Variables

A. Independiente

Daño al Menor, entendido como el menoscabo o detrimento de la salud física, psicológica, emocional que se le ocasiona a una persona que tiene entre cero y dieciocho años, pues conforme a la Convención de los Derechos del Niño se considera niño a la persona menor de dieciocho años.

Sanción Administrativa, entendida como la restricción de un derecho que se aplica debido a la comisión de una conducta prohibida y que está prevista como infracción por la ley. Fundamentalmente busca la reparación del daño ocasionado por la infracción.

Principio de Interés Superior del Niño y Adolescente, norma rectora del derecho de familia y del derecho del niño y adolescente, que implica un compromiso por parte del Estado para adoptar las decisiones más adecuadas cuando en cualquier procedimiento administrativo, judicial o de otra índole, se encuentren ventilando derechos de menores de edad.

B. Dependiente:

El daño al menor como circunstancia agravante en la graduación de las sanciones administrativas previstas en la Ley N° 29571. La Ley N° 29571, Código de Protección del Consumidor, describe una serie de conductas que de cometerse son pasibles de una sanción por afectar los derechos de los consumidores; sin embargo, no ha previsto como circunstancia agravante el hecho de que la conducta se realice en contra de un menor de edad en la relación de consumo, será consecuencia de la correcta aplicación del principio de interés superior del niño y adolescente.

2.5.2. Operacionalización

La operacionalización consiste en un procedimiento metodológico de descomposición de las variables de modo deductivo, en este sentido este procedimiento se ha desarrollado de la siguiente manera:

VARIABLES	INDICADORES	ITEMS	INSTRUMENTO	TIPO DE INVESTIGACIÓN
Daño al menor	Definición y consecuencias de Daño Derechos Producto- servicio	¿Conoce usted en que consiste el daño originado al menor frente al consumo de productos y servicios que contienen información exagerada para ser adquiridos? ¿Conoce usted cuales son los derechos del menor que se deben proteger frente al daño originado por el consumo de productos y servicios?	Entrevista Encuesta	Sustantiva o Teórica
Sanción administrativa	Criterios	¿Conoce cuáles son los criterios de sanciones administrativas originadas por “las infracciones relacionadas a la protección al consumidor”? ¿Piensa usted que considerando como criterio el daño al menor como circunstancia agravante en las sanciones administrativas sus derechos de éstos estarán mejor protegidos?		
Principio de interés superior del niño y adolescente	Definición	¿Conoce usted en que consiste el Principio de interés superior del niño y adolescente?		Sustantiva o Teórica
El daño al menor como circunstancia agravante en la graduación de las sanciones administrativas previstas en la Ley N° 29571	Daño al menor de edad Sanción administrativa	¿Considera que el daño al menor de edad que se le ocasione en una relación de consumo debe ser considerada como circunstancia agravante?		Sustantiva o Teórica

2.6. Métodos de Análisis de Datos

2.6.1. Método Hermenéutico

El proceso de la información desde la triangulación hermenéutica se determina por el proceso de triangulación hermenéutica, la acción de reunión e intercambio dialéctico de toda la información perteneciente al objeto de estudio obtenida en una indagación por medio de los instrumentos oportunos, y se compone el corpus de resultados de la investigación (Cisterna Cabrera, 2005. Pág. 70).

1. Selección de la información

La información que se elige permite diferenciar lo que es útil para los fines de la investigación de aquello que no es útil y por lo tanto se descarta. El primer criterio discrecional para esta acción es el de pertinencia, que se determina en la acción de considerar lo que evidentemente se relaciona con el tema de la investigación; y el segundo punto a tomar en cuenta es el de relevancia, lo que se descubre ya sea por su continuidad o por su asertividad en relación con el tema que se investiga. Estos descubrimientos de información acertada y relevante son los que consintieron pasar a la fase subsiguiente que a continuación se detalla. (Cisterna Cabrera, 2005. Pág. 70).

2. La triangulación del marco teórico

Como acción de exploración y cuestionamiento reflexiva de la literatura especializada, actualizada y oportuna sobre la materia abordada, es importante que el marco teórico no solo sea un enmarcamiento bibliográfico, sino otra fuente primordial para la construcción de conocimiento que toda investigación debe contribuir. Para ello, hay que sustentarse en la discusión bibliográfica y desde allí originar una nueva discusión, pero ya con los resultados precisos del trabajo de campo desde una pregunta reflexiva entre lo que la literatura nos muestra sobre los diferentes tópicos, que en el diseño metodológico hemos plasmado como categorías y sub-categorías, y lo que sobre ello hemos encontrado cuando hemos realizado la indagación de la información. La ejecución de esta triangulación es la que concede a la investigación su carácter de cuerpo

compuesto y su sentido como totalidad significativa". (Cisterna Cabrera, 2005. Pág. 70).

La interpretación de la información se compone en el momento hermenéutico propiamente dicho, y por ello se construye un conocimiento nuevo en esta elección paradigmática. El efectuar correctamente este procedimiento de interpretación se ve viabilizado cuando iniciamos con los elementos teóricos de base, que nos ayudan a pensar orgánicamente y, con ello, establecer de modo ordenado y secuencial la argumentación.

2.7. Aspectos Éticos.

Este proyecto de indagación se ha realizado en base concreta y directa a un problema que viene sucediendo en la realidad actual, con información obtenida de bibliotecas y las normas pertinentes, además se han hecho las citas pertinentes de los autores de los libros utilizados, por ello esta investigación es auténtica y sin plagio alguno regida en el marco de los lineamientos de autenticidad. Por tanto, se cumple con las exigencias y las formalidades requeridas para la realización y desarrollo de la tesis conforme a lo exigido.

III. RESULTADOS

En este Capítulo se describen y analizan los resultados obtenidos luego de la aplicación de los instrumentos de investigación como la entrevista, la encuesta y las fichas de análisis de información, los mismos que se plasman en las siguientes tablas.

La primera cuestión tuvo como finalidad determinar si los entrevistados estaban de acuerdo con que el consumo de productos o el uso de servicios defectuosos por menores de edad tenían efectos nocivos para éstos; el cien por ciento de encuestados manifestaron estar de acuerdo con la afirmación, conforme se describe en la tabla siguiente:

Tabla N° 01

"Daño al menor frente al consumo de productos y servicios"		
El Daño al menor de edad	f ¹	f ²
De acuerdo	2	40%
Parcialmente de Acuerdo	1	20%
Desacuerdo	2	40%
TOTAL	5	100.00

Fuente: Fiorella del Pilar Zapata Saavedra



Ilustración 1

Fuente: Fiorella del Pilar Zapata Saavedra

En la primera interrogante aplicada a los profesionales del derecho, con respecto al tema si conocían el daño que se originaba al menor frente al consumo de productos y servicios que contienen información exagerada o distorsionada determinaron con un 40% que conocían del tema, es decir menos de la mitad tienen conocimiento de dicho tema. Por lo que falta fomentar en la sociedad y en los operadores del derecho temas sobre el consumismo extremo que vive nuestra sociedad y el daño que se puede generar en el menor si no hay un consumo consciente ni un límite a la publicidad engañosa o distorsionada.

Tabla N° 02

En la tabla N° 2, se detallan los resultados obtenidos ante la pregunta relacionada a los derechos que deben ser protegidos en la publicidad dirigida a menores de edad y al consumo de productos y servicios.

“Derechos del menor protegidos frente al consumo de productos y servicios”		
Derechos del menor	f ¹	f ²
De acuerdo	4	80%
Parcialmente de Acuerdo	1	20%
Desacuerdo	0	0%
TOTAL	5	100%

Fuente: Fiorella del Pilar Zapata Saavedra

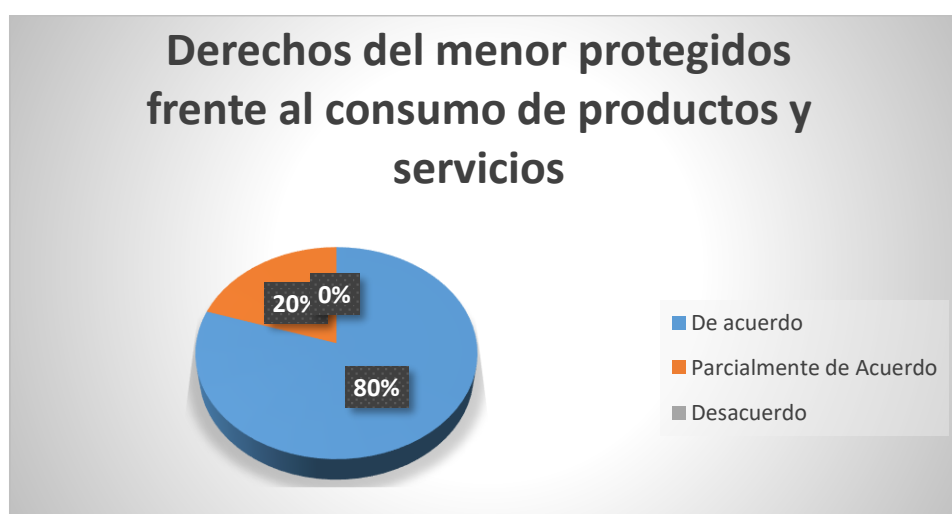


Ilustración 2 Fuente: Fiorella del Pilar Zapata Saavedra

Las opiniones otorgadas sobre el amparo de los derechos del menor frente al daño originado por el consumo de productos o servicios arrojan un 80% estar de acuerdo; es decir que si conocen cuales son estos derechos que deben ser protegidos y salvaguardados por diversas transgresiones que se pueden originar por la masa de proveedores que ofrecen diversos productos en el mercado; promocionándolos así en el mercado de una forma descontrolada con una publicidad exagerada en información, pues tienen como único fin venderlos, generar ingresos y posicionarse así en el mercado.

Tabla N° 03

En la tabla tres se describen los resultados obtenidos ante la pregunta relacionada a las infracciones administrativas relacionadas a la protección del consumidor en una relación de consumo:

“Infracciones administrativas relacionadas a la protección al consumidor”		
Infracciones administrativas	f ¹	f ²
De acuerdo	3	60%
Parcialmente de Acuerdo	0	0%
Desacuerdo	2	40%
TOTAL	5	100%

Fuente: Fiorella del Pilar Zapata Saavedra

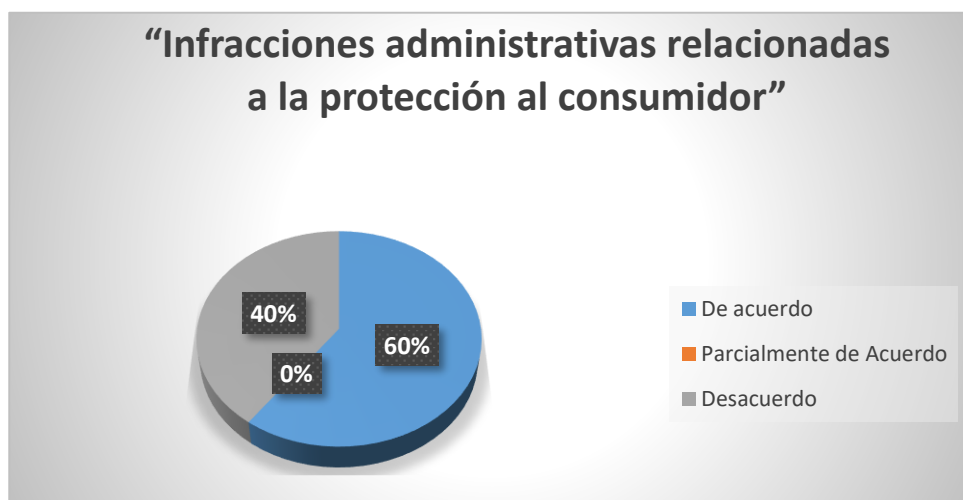


Ilustración 3

Fuente: Fiorella del Pilar Zapata Saavedra

Hace alusión esta interrogante si es de conocimiento de los profesionales del derecho los diversos criterios que son utilizados como parámetros para imponer las sanciones administrativas originadas por las infracciones relacionadas a la protección del consumidor, arrojando como resultado un 60% de acuerdo, es decir que conocen las consecuencias si se vulnera al consumidor en el mercado teniendo noción de como direccionar la justicia hacía aquellos que son trasgredidos.

Tabla N° 04

En la tabla cuatro se registran los resultados obtenidos ante la interrogante relacionada a si se debe considerar como circunstancia agravante en la graduación de las sanciones administrativas al daño directo o indirecto que se ocasione al menor de edad por el uso de un servicio o por el consumo de un producto.

“considerar como circunstancia agravante en las sanciones administrativa el daño al menor para buscar protección”		
Circunstancia agravante daño al menor	f ¹	f ²
De acuerdo	3	60%
Parcialmente de Acuerdo	0	0%
Desacuerdo	2	40%
TOTAL	5	100%

Fuente: Fiorella del Pilar Zapata Saavedra

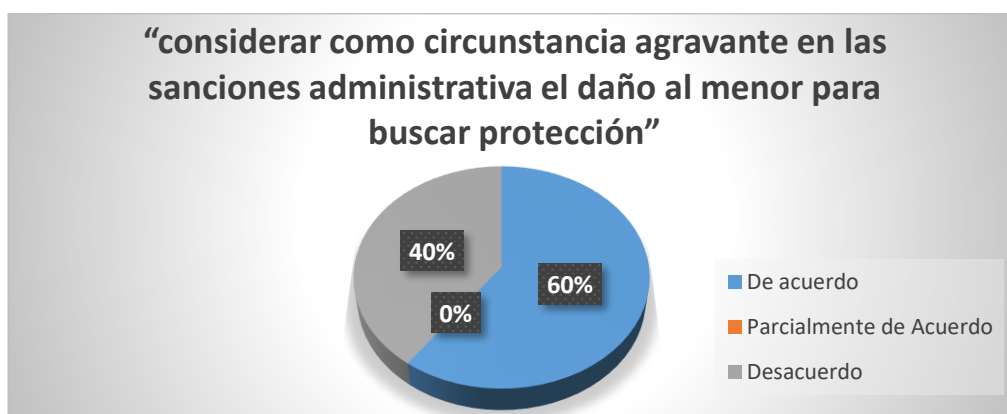


Ilustración 4 Fuente: Fiorella del Pilar Zapata Saavedra

Señalan los profesionales que, al considerar la figura del daño como circunstancia agravante con respecto a las sanciones administrativas en el código del consumidor, los derechos de estos estarán mejor protegidos, salvaguardados y resguardados; arrojando como resultado el 60% del total, es decir que están de acuerdo al considerarse como agravante el criterio del daño originado exclusivamente al menor de edad, por no tener la capacidad de elegir lo que se ofrece en el mercado con una diversidad de información, que muchas veces esta es excesiva, engañosa o exagerada.

Tabla N° 05

En esta tabla se indaga con relación al conocimiento que tienen los encuestados sobre el principio del interés superior del niño y adolescente; dado que se seleccionó una muestra conformada por expertos para obtener información confiable, los resultados fueron que el 100% conoce dicho principio; por lo tanto, la información obtenida es relevante y confiable y de mucha utilidad para el objeto de la investigación.

“Conocimiento sobre el Principio de interés superior del niño y adolescente”		
Principio de interés superior del niño y adolescente	f ¹	f ²
De acuerdo	5	100%
Parcialmente de Acuerdo	0	0%
Desacuerdo	0	0%
TOTAL	5	100%

Fuente: Fiorella del Pilar Zapata Saavedra

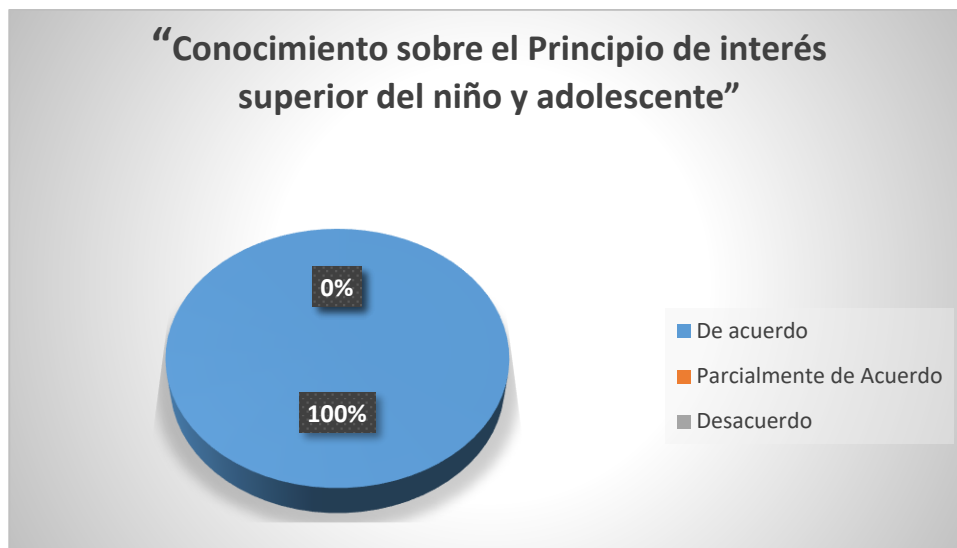


Ilustración 5

Fuente: Fiorella del Pilar Zapata Saavedra

Con respecto a la última interrogante la población encuestada, que son los operadores del derecho determinan que tienen noción con respecto a la definición y fundamento sobre el “Principio de interés superior del niño y adolescente”, y por ende al considerarse el daño como circunstancia agravante se estaría protegiendo este principio; ya que se tendría mucho más cuidado por parte del proveedor al momento de ofrecer su producto o servicio en el mercado, ya que no tendría como único fin lucrar, sino también proteger al menor en todo momento.

Tabla N° 06

Definición y fundamento sobre el “Principio de interés superior del niño y adolescente”		
Principio de interés superior del niño y adolescente	f ¹	f ²
De acuerdo	5	100%
Parcialmente de Acuerdo	0	0%
Desacuerdo	0	0%
TOTAL	5	100%

Fuente: Fiorella del Pilar Zapata Saavedra

“definición y fundamento sobre el “Principio de interés superior del niño y adolescente””

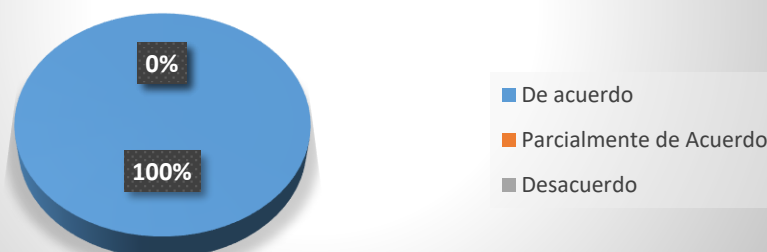


Ilustración 6

Fuente: Fiorella del Pilar Zapata Saavedra

Con respecto a la última interrogante la población encuestada, que son los operadores del derecho determinan que tienen noción con respecto a la definición y fundamento sobre el “Principio de interés superior del niño y adolescente”, y por ende al considerarse el daño como circunstancia agravante se estaría protegiendo este principio; ya que se tendría mucho más cuidado por parte del proveedor al momento de ofrecer su producto o servicio en el mercado, ya que no tendría como único fin lucrar, sino también proteger al menor en todo momento.

IV. DISCUSIÓN

Este trabajo de indagación tiene como título “Daño al menor como circunstancia agravante especial en la graduación de las sanciones administrativas de la ley N° 29571. Este tema tiene como problema de investigación la interrogante; ¿Cuál es la razón jurídica para establecer como circunstancia agravante especial el daño ocasionado al menor en la graduación “de las sanciones administrativas previstas en la Ley N° 29571”? Planteándose, así como Hipótesis “La razón jurídica para establecer como circunstancia agravante especial el daño ocasionado al menor de edad en la graduación de las sanciones administrativas previstas en la Ley N° 29571 “es el principio de interés superior del niño y adolescente”, buscando así el amparo del menor en una sociedad donde existe un consumismo descontrolado.

La presente Hipótesis ha sido planteada con el propósito para que el menor sea protegido en todo momento con respecto a la comercialización de productos u ofrecimiento de servicios promocionados en el mercado; donde los proveedores tienen muchas veces la única finalidad de solo lucrar y posicionarse en el mercado, aprovechándose de su ingenuidad de estos para incentivarlos, captar su atención y conseguir una respuesta positiva para el consumo de lo que ofrecen. Pues a pesar de que existe un cuerpo legal que lo protege, como es el mismo “código de protección y defensa del consumidor” en su artículo 16 donde hace alusión a la difusión ofrecida a los menores de edad no debe incitarlos a conclusiones dudosas sobre las características verídicas de los productos ofrecidos, debiendo respetar la inocencia e ignorancia de los menores. Asimismo, la publicidad emitida no debe forjar emociones de subordinación al menor que no adquiere el producto proporcionado”.

Por otro lado, también se tiene el Decreto Legislativo 691, donde prescribe en su artículo 10 las reglas que deben someterse los anuncios dirigidos a menores de edad; no existe un criterio para determinar ese daño hacía el menor como agravante en las sanciones administrativas en dicho código y así poder sancionar aquellos proveedores, ya sea distribuidores, prestadores, productores e importadores, para evitar dañar al menor de edad y buscar en todo momento

su protección, salvaguardando así el “principio de interés superior del niño y adolescente.”

Determinándose así de este análisis que al establecerse como una agravante en las sanciones administrativas el daño hacía el menor en la ley 29571, los proveedores que ofrecen sus productos o servicios tendrán mayor tino y precaución al momento de brindar la información de éstos, ya que así evitará en todo momento ser sancionado hasta con 450 UIT, de acuerdo con la infracción administrativa prevista por la conducta del proveedor al transgredir las disposiciones prescritas en el presente código.

Todo lo mencionado en este apartado de discusión sobre los resultados de la investigación, ha tenido sustento en la realidad social que vivimos a diario sobre un consumismo extremo, en las normas y doctrinas mencionadas tal cual se han mencionado en los apartados anteriores.

El primer objetivo específico de este estudio fue analizar las infracciones administrativas contempladas en el código del consumidor, el mismo que se ha logrado en la medida que se ha analizado el código del consumidor y se ha llegado a determinar que se considera infracción al código de consumidor la vulneración de cualquier derecho reconocido a quien consume productos o hace usos de servicios que un proveedor oferta o la violación de las normas reglamentarias previstas en él. Es importante mencionar que las infracciones al código del consumidor deben estar previstas en él para así poder ser sancionadas.

Las infracciones han sido clasificadas como leves, que son aquellas que implican un daño leve a los derechos de los consumidores y que por ende la sanción es menos drástica. Luego se tiene las infracciones graves que ya implican una afectación mayor de los derechos de los consumidores. Finalmente tenemos las infracciones muy graves que ya importan una lesión o menoscabo importante de los derechos de los consumidores y que por ende son sancionados más drásticamente.

El segundo objetivo fue analizar las sanciones administrativas contempladas en el código del consumidor, objetivo que también se ha logrado en la medida que se ha determinado que las sanciones, son, en principio una

consecuencia jurídica a la comisión de una infracción y en segundo término constituyen una respuesta del estado y una manera de resarcir los daños ocasionados por la conducta antijurídica. Las sanciones deben cumplir con las características de legalidad, es decir deben estar previstas en la ley, y de proporcionalidad, es decir, debe existir correspondencia entre la infracción y la restricción de derechos que implica la sanción. No deben ser muy drásticas que impidan el tráfico comercial, ni muy leves que el consumidor sienta que está desprotegido en la relación de consumo.

El tercer y último objetivo específico fue examinar “el principio del interés superior del niño y adolescente”, el cual también se ha logrado pues se ha recurrido a la legislación tanto nacional como extranjera, así como a la doctrina y jurisprudencia a efecto de comprender el significado de este principio y su importancia en la actuación del Estado en las situaciones donde se ventilan derechos de menores de edad; así mismo en la administración de justicia de menores. Este principio constituye un verdadero axioma que obliga al Estado a proteger a los menores de edad en todas sus actuaciones.

En el caso de la relación de consumo en la que interviene un menor de edad, el Estado debe preocuparse desde la publicidad hasta la solución de los conflictos jurídicos que surjan en esta relación; y siempre a favor del menor por ser este una persona que es vulnerable y la sociedad y el Estado debe protegerla.

V. CONCLUSIONES

1. El menor de edad puede participar como parte activa en una relación de consumo, pero dada su ingenuidad, inexperiencia, etc., propios de su edad debe recibir una protección especial por parte del Estado, quien debe velar porque la publicidad que se haga de los productos o servicios que éste consume refleje las verdaderas características de dichos productos y servicios de modo que tome una decisión libre e informada y se evite que se le ocasione un daño, físico psicológico o emocional.
2. El principio de interés superior del niño y adolescente tiene como fundamento insertar como criterio agravante en las sanciones administrativas del Código de protección y defensa del consumidor; el daño hacia los menores de edad, ya sea físicas o psicológicas por consumir productos o servicios con información engañosa, alterada, exagerada o incierta ofrecidos en el mercado, ya que este principio tiene como fundamento tal como se señala en el artículo 2, que la ley instituye límites y garantías legales para el respeto fundamental del Interés Superior del Niño, siendo un derecho, un principio y una regla de procedimiento que se le ofrece al menor para que no se le perturbe directa o indirectamente, avalando así sus derechos humanos.
3. Al establecerse como criterio agravante el daño al menor, se estaría concientizando a los proveedores que ofrecen sus productos o servicios a tener mayor prudencia y límites al emitir información de estos, evitando así que sean exagerados, distorsionados o engañosos, buscando en todo momento su prioridad física como psicológica de esta población vulnerable. Asimismo, estos proveedores en todo momento fijaran parámetros en la información de su publicidad, emitiendo solo la verdad de ellos para evitar ser sancionados con multas exorbitantes, y no generar una caída en sus ingresos y en su credibilidad como empresa.
4. A pesar de existir un cuerpo normativo que trate de buscar la protección del menor ante la publicidad engañosa, tal como “el código de protección y defensa del consumidor” Ley N° 29571, el Decreto Legislativo N° 691 y la reciente “Ley de promoción de la alimentación saludable para niñas, niños

y adolescentes”; no existe respeto hacia estas puesto que no son cumplidas a cabalidad, generando así vulneraciones de derechos, daños físicos como psicológicos. Al existir esta agravante se estaría sancionando hasta con 450 UIT según el “art 110 del apartado las Sanciones Administrativas, Ley N° 29571”, originando así protección, amparo y resguardo a esta población sensible; produciendo por ende un buen desarrollo en diferentes ámbitos ya sea en la familia, escuela, sociedad y en la misma salud del menor.

VI. RECOMENDACIONES

1. Al legislador peruano se recomienda insertar como criterio agravante el “daño al menor” en el artículo 112 en las graduaciones de las sanciones administrativas, del “código de protección y defensa del consumidor” Ley N°29571, ya que es claro que no existe una sanción específica con respecto a la vulneración de esta población por ofrecimiento de productos o servicios con información engañosa o distorsionada, pues al considerarse esta figura como agravante; el proveedor ya sea distribuidores, prestadores, productores e importadores evitaren dañar al menor de edad y buscaran en todo momento su protección. Asimismo, habrá mayor responsabilidad al emitir sus productos o servicios en el mercado, impedir ser sancionado o multados, conseguir mejor credibilidad y confianza con respecto a los que ofrecen y sobre todo un desarrollo viable y saludable en el menor de edad dentro de una sociedad consumista.
2. A los dueños de empresas que provean de productos o servicios destinados al consumo de niños y adolescentes que su elaboren su publicidad de modo que esta no induzca a los menores a tomar decisiones equivocadas en relación con los productos que consumirán, ya que ellos les puede causar daño el cual puede ser irreparable.
3. A los medios de comunicación social y al Estado para que ejerzan control sobre el contenido de la publicidad dirigida a menores de edad a efecto de que ésta no perturbe su normal desarrollo y que sus decisiones respecto de los productos y servicios que consumirá sean fruto de una publicidad adecuada, sencilla, veraz y oportuna.

REFERENCIAS

- Aguila Grados, C. (2013). *ABC del Derecho*. Lima, Perú: San Marcos E.I.R.L.
- Aguila Grados, C., & Gallardo Michelot, M. (2014). *Protección al Consumidor*. Lima: San Marcos E.I.R.L.
- Aguila Grados, G., & Capcha Vera, E. (2013). *El ABC del Derecho Civil*. Lima, Perú: San Marcos .
- Cabrera, C. (2005).
Código Civil. (2015). Lima: Jurista Editores .
- Durand Carrión, J. B. (2011). "Los vacíos del Nuevo Código de Protección y Defensa del Consumidor y su repercusión en los derechos del consumidor, perspectivas y efectos en el Derecho Civil ". Lima, Perú.
- Morais, M. G., & Corneiles, C. (2004). *TERCER AÑO DE VIGENCIA DE LA LEY ORGÁNICA PARA LA PROTECCIÓN DEL NIÑO Y DEL ADOLESCENTE*. Montalban, Caracas: Texto, CA.
- Ossorio, M. (2013). *Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales*. Guatemala: Edición Electronica.
- Quintana Vivanco, R., & Cabrera Vàsquez, Marco Antonio. (2011). *DERECHO ADMINISTRATIVO Y DERECHO PROCESAL ADMINISTRATIVO*. Lima, Perú: San Marcos de Anibal Jesùs Paredes Galvàn.
- Quiroga León, A. (2014). *El Debido Proceso Legal en el Peru y en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos*. Lima: IDEMSA.
- UNICEF. (2006). *Convención sobre de los Derechos del Niño*. Madrid, España: Rex Media.
- Vergary Béjar, V., & Gómez Apac, H. (2009). *La potestad sancionadora y los principios del procedimiento sancionador*. Lima: UPC.

ANEXOS

Matriz de Consistencia Lógica

Problema	Hipótesis	Variables	Objetivos
¿Cuál es la razón jurídica para establecer como circunstancia agravante especial el daño ocasionado al menor en la graduación “de las sanciones administrativas previstas en la Ley N° 29571”?	La razón jurídica para establecer como circunstancia agravante especial el daño ocasionado al menor de edad en la graduación de las sanciones administrativas previstas en la Ley N° 29571 es “el principio de interés superior del niño y adolescente”.	Daño al menor Sanción administrativa Principio de interés superior del niño y adolescente	<ul style="list-style-type: none"> • Establecer la razón jurídica como circunstancia agravante especial el daño ocasionado al menor de edad en la graduación “de las sanciones administrativas previstas en la ley N° 29571” • Analizar las infracciones administrativas contempladas en el código del consumidor. • Analizar las sanciones administrativas contempladas en el código del consumidor. • Examinar “el principio del interés superior del niño y adolescente”

FUENTE: FIORELLA DEL PILAR ZAPATA SAAVEDRA

Matriz de Consistencia Metodológica.

Tipo y Diseño de la Investigación	Población, Muestra	Instrumentos de Investigación	Criterios de validez y Confiabilidad
Sustantiva teórica Diseño no experimental	5 entrevistas: Profesionales del derecho (abogados)	Entrevista	Validación por consulta de expertos. Método de Alfa de Cronbach

FUENTE: FIORELLA DEL PILAR ZAPATA SAAVEDRA

Validación de instrumentos

La validación de instrumentos consta de documentos:

Constancia de validación el cual inicia con los datos del especialista después de la guía de pautas y cuestionario, los que se dividen en nueve ámbitos, primero la claridad, segundo la objetividad, tercero la actualidad, cuarto la organización, quinto la suficiencia, sexto la intencionalidad, séptimo la consistencia, octavo la coherencia y noveno la metodología en donde el especialista después de cinco niveles; siendo deficiente, aceptable, buen, muy bueno y excelente. Finalmente firma la constancia en señal de culminación del proceso.



CONSTANCIA DE VALIDACIÓN

Yo, Elba Alicia de los Milagros Correa Tranco con DNI N° 7065 2713
registrado con código NANR/COP 4780 de profesión Abogada
desempeñándome actualmente como Abogada civilista
en Cargo INDEPENDIENTE; por medio de la presente hago
constar que he revisado con fines de Validación los instrumentos los cuales se
aplicaran en el proceso de investigación.

Luego de hacer las observaciones pertinentes, puedo formular las siguientes
apreciaciones.

Guía de Pautas Para Jóvenes Universitarios de la UCV-Piura	DEFICIENTE	ACEPTABLE	BUENO	MUY BUENO	EXCELENTE
1. Claridad					X
2. Objetividad				X	
3. Actualidad				X	
4. Organización					X
5. Suficiencia				X	
6. Intencionalidad				X	
7. Consistencia				X	
8. Coherencia					X
9. Metodología				X	

En señal de conformidad firmo la presente en la ciudad de Piura, Febrero de 2020

Especialista : Elba Alicia de los Milagros Correa Tranco
DNI : 70652713
Especialidad : Derecho civil
E-mail : alithi2116@gmail.com

Elba Alicia de los Milagros Correa Tranco
ABOGADA
Reg. IC' P. 4780



FICHA DE EVALUACIÓN DEL INSTRUMENTO: GUÍA DE PAUTAS

“DAÑO AL MENOR COMO CIRCUNSTANCIA AGRAVANTE ESPECIAL EN LA GRADUACIÓN DE LAS SANCIONES ADMINISTRATIVAS DE LA LEY N° 29571”

Indicadores	Criterios	Deficiente 0 – 20				Regular 21 – 40				Buena 41 – 60				Muy Buena 61 - 80				Excelente 81 - 100				Observaciones
ASPECTOS DE VALIDACION		0	6	11	16	21	26	31	36	41	46	51	56	61	66	71	76	81	86	91	96	
		5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100	
1. Claridad	Esta formulado con un lenguaje apropiado																				X	
2. Objetividad	Esta expresado en conductas observables																		X			
3. Actualidad	Adecuado al enfoque teórico abordado en la investigación																		X			
4. Organización	Existe una organización lógica entre sus ítems																				X	

Piura, febrero de 2020

Especialista: *Elba Alicia de los Milagros Cordero Tranco*

DNI: *70652713*

Teléfono: *963956872*

E-mail: *alhti2116@gmail.com*



ENTREVISTA

Apreciados lectores, tengan por contribuir con sus apreciaciones con relación al texto de indagación designado: ***“DAÑO AL MENOR COMO CIRCUNSTANCIA AGRAVANTE ESPECIAL EN LA GRADUACIÓN DE LAS SANCIONES ADMINISTRATIVAS DE LA LEY N° 29571”***

RESUMEN: La presente investigación tiene como finalidad insertar como circunstancia agravante la figura del daño en la graduación de las sanciones administrativas, protegiendo así aquella población vulnerable que carece de experiencia y es ingenua al momento de elegir algún producto o servicio que se ofrecen por medio de una publicidad engañosa o distorsionada.

1. **¿Conoce usted en que consiste el daño originado al menor frente al consumo de productos y servicios que contienen información exagerada para ser adquiridos?**

2. **¿Conoce usted cuales son los derechos del menor que se deben proteger frente al daño originado por el consumo de productos y servicios?**

3. **¿Conoce cuáles son los criterios de sanciones administrativas originadas por “las infracciones relacionadas a la protección al consumidor”?**

4. **¿Piensa usted que considerando como criterio el daño al menor como circunstancia agravante en las sanciones administrativas sus derechos de éstos estarán mejor protegidos?**

5. **¿Conoce usted en que consiste el “Principio de interés superior del niño y adolescente?” y ¿Cree que al considerarse como circunstancia agravante el daño al menor se protegería este principio?**

Muchas gracias por su participación